



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

SALA PLENA

15-07-16

77:07

SENTENCIA: 191/2016.
FECHA: Sucre, 21 de abril de 2016.
EXPEDIENTE N°: 836/2012.
PROCESO : Contencioso Administrativo.
PARTES: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
MAGISTRADA RELATORA: Rita Susana Nava Durán.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES representada por Apolinar Tórrez Gutiérrez contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) representada por Julia Susana Ríos Laguna Directora General a.i.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 18 a 23, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 841/2012 de 18 de septiembre; contestación de demanda de fs. 58 a 61; réplica de fs. 68 a 69; dúplica de fs. 72; antecedentes administrativos.

CONSIDERANDO I (CONTENIDO DE LA DEMANDA): Apolinar Tórrez Gutiérrez en representación de la GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, dentro del plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa (fs. 18 a 23), pidiendo la revocatoria total de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 0841/2012 de 18 de septiembre y consecuentemente la revocatoria de la de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0561/2012 de 2 de julio la cual dispone anular la Resolución Sancionatoria N° 18-0016-12 de 1 febrero, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto Inicial de Sumario Contravenciones N° 25-1341-11 de 7 de septiembre y en consecuencia mantener estas últimas firmes y subsistentes en todas sus partes, bajo los siguientes argumentos:

Señala que la contribuyente Gisbert Jarandilla Zoila Gladys con NIT 2373267013, presentó el 2 de junio de 2009, Declaración Jurada Formulario 200 IVA del periodo mayo de 2009, el cual no fue pagado, por lo que la Administración Tributaria en aplicación de los arts. 165 y 168 párrafo I de la Ley 2492 concordante con el artículo 21 inc. a) del DS N° 27310 de 9 de enero de 2004, aplicó la sanción sobre una deuda tributaria que se encuentra autodeterminada y no pagada por lo que ejercer las facultades previstas en el art. 100 de la Ley 2492 sería incurrir en desconocimiento de la norma legal que rige a la Administración Tributaria, ya que la controversia nunca trató sobre un procedimiento de determinación en aplicación a los arts. 21, 26 y 100 de la Ley 2492, sino que se trata de un procedimiento para sancionar contravenciones emergentes de un Título de Ejecución Tributaria en el que la contribuyente adecuó su conducta al procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias por medio de un sumario, que se atribuye a la Omisión

de Pago. Por ello, la AGIT indica erróneamente que la Administración Tributaria debía ejercer las facultades otorgadas por Ley para tener firme convicción de la base imponible, cuando la "base imponible" a la que se refiere fue autodeterminada por la contribuyente al presentar la Declaración Jurada, por lo que no corresponde a la Administración Tributaria, establecer la real base imponible correspondiente al periodo fiscal mayo de 2009, para aplicar la sanción, caso contrario no se estaría observando las normas tributarias para aplicar "los procedimientos de imposición de sanciones, sobre títulos de ejecución tributaria", pues seguir ese camino es poner en tela de juicio la veracidad de las Declaraciones Juradas extraídas de nuestro Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), es desconocer el DS N° 27310 y arts. 4, 7 y 28; del DS N° 25183 arts. 1, 2, 3, 4 y 6; máxime el art. 78 del Código Tributario y 65 de la Ley 2492 sobre sanción por omisión de pago.

La Administración Tributaria, respecto a los procedimientos de imposición de sanciones por declaraciones juradas, aplicó lo dispuesto por el art. 94 párrafo II, concordante con el numeral 6) del párrafo I del art. 108 de la Ley 2492 y en aplicación de la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, que establece el procedimiento para imposición de sanciones por Declaraciones Juradas presentadas que determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente, disponiendo en su art. 23 núm. 1) que *"la Administración Tributaria no requiere emitir intimación o Resolución Determinativa para su cobro"*, no mereciendo operación interpretativa y/o de cálculo, por lo que, por su naturaleza la Declaración Jurada impaga, por disposición expresa del art. 108 del CTB constituye en título de ejecución tributaria.

Señala que el ente fiscal procedió conforme a procedimiento para sancionar contravenciones tributarias e impuso una sanción directa por Omisión de Pago de la Declaración Jurada, Formulario 200 IVA, por el periodo fiscal mayo de 2009, por tanto no existe etapa de verificación, sino más bien existe una deuda impaga determinada por la misma contribuyente.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria no ha considerado que dentro de los antecedentes que se remitieron a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria el informe N° 07 0371 12 con CITE:/SIN/GDEA/DJCC/UCC/INF/15/2012 de 18 de enero de 2012 señaló que *"...por cuanto la contribuyente debe presentar ante el departamento de Fiscalización en el caso de considerar una rectificación de la declaración Jurada observada"*, ha vulnerado el principio de verdad material, toda vez que no ha tomado en cuenta a la hora de emitir Resolución de Recurso Jerárquico la rectificación que la contribuyente no realizó, conforme el art. 78 de la Ley 2492.

La AGIT, desconoció la legalidad de la Declaración Jurada constituida en Título de Ejecución Tributaria reconocida por la Ley 2492, así como por el DS N° 25183 de 28 de septiembre de 1998,



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 836/2012. Contencioso Administrativo.- Gerencia
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra la
Autoridad General de Impugnación Tributaria.

art. 1 y art. 4 del DS N° 27874. La Administración Tributaria sustentó su pretensión con base en las pruebas aportadas siendo objetivas y razonables, como son los antecedentes administrativos, sin embargo quien controvirtió la verdad de los hechos fue la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria que exigió demostrar de qué manera se vincula la cuestionada DD.JJ presentada por la contribuyente, aseveración que puso en tela de juicio la Declaración Jurada Formulario 200-IVA, Número de Orden 8369422 del período fiscal mayo 2009, siendo la Autoridad General de Impugnación Tributaria, incompetente para dirimir la **DDJJ** que tiene calidad de Cosa Juzgada, obviando la consideración de los antecedentes administrativos.

CONSIDERANDO II (CONTENIDO DE LA CONTESTACIÓN): Que, admitida la demanda por decreto de 14 de febrero de 2013 (fs. 30) y corrida en traslado a la autoridad demandada, apersonándose Julia Susana Ríos Laguna en su condición de Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, respondió negativamente la demanda (fs. 58 a 61), solicitando se la declare improbadamente, con los siguientes fundamentos:

Que, el AISC N° 25 1341 11, señala en su parte considerativa que se notificó a la contribuyente con el PIET CITE: SIN/GDEA/DJCC/PIET/1999 (N° 24 3102 11), por evidenciarse la falta de pago o el pago de menos, correspondiendo calificar la conducta del contribuyente e imponer la sanción conforme al art. 165 de la Ley 2492 y en la parte resolutive, instruyó el inicio del sumario contravencional, de conformidad al art. 168 de la Ley 2492, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, de lo que se evidencia que el AISC señala la falta de pago o el pago de menos de la Declaración Jurada, sin que conste claramente el acto u omisión por el que se le atribuye a la contribuyente la comisión de la contravención de omisión de pago, es decir la Administración Tributaria no especificó, si se evidenció la falta de pago o el pago de menos, siendo que conforme el inciso e), núm. 2) del art. 17 de la RND N° 10-0037-07, el Auto Inicial de Sumario Contravencional debe contener el acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida, asimismo señala que no cumple los requisitos esenciales establecidos en el art. 168 de la Ley 2492, ya que no consta claramente, el acto u omisión que se atribuye.

Por otro lado refiere que la RND N° 10-0037-07 en su art. 17, incisos f) y h), Caso 3, núm. 3), señala los requisitos que la Resolución Sancionatoria debe cumplir, como es contemplar el acto u omisión que origina la posible contravención, la norma específica infringida y la relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo, además de la valoración realizada por la Administración Tributaria, aspectos que no han sido cumplidos en la Resolución Sancionatoria ya que de manera genérica hace referencia a la normativa referida a la Declaración Jurada que no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, sin señalar qué acto u omisión habría cometido la

contribuyente, además, no contempla una valoración específica de la documentación presentada como descargo, estableciendo que los descargos presentados no son suficientes para desvirtuar la omisión de pago.

El impuesto determinado en la Declaración Jurada, fue imputado con crédito en valores, como se refleja en el Cód. 677, lo cual debió ser verificado por la Administración Tributaria previamente a iniciarse el procedimiento sancionador, porque si realmente hubiese habido el pago con crédito en valores no hubiere existido la deuda, aspecto que tampoco fue considerado.

Respecto a que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, fue quien supuestamente contravino la verdad de los hechos, se debe puntualizar que se evidencia que no se analizó la verdad material ya que el SIN no ejercitó sus facultades conferidas en el art. 100 de la Ley 2492, limitándose a sancionar, sin considerar que la base para la sanción por omisión de pago es una Declaración Jurada sobre la cual la titular del NIT ha manifestado que desconoce su procedencia y planteó reclamo oportuno, además de proseguir hasta las instancias correspondientes. Frente a esta situación la Administración Tributaria, debió ejercer las facultades otorgadas por Ley, con carácter previo, a fin de llegar a la verdad de los hechos, verificar la realidad económica de la contribuyente y tener la firme convicción de la base imponible declarada, por lo que se ha evidenciado que la contribuyente estuvo en situación de indefensión al no existir certeza sobre la existencia de una deuda tributaria líquida y exigible sobre la que se podía imponer la sanción por Omisión de Pago, correspondiente al IVA del periodo fiscal mayo 2009.

CONSIDERANDO III (CONFLICTO JURÍDICO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN): Que, al haberse ejercido el derecho a réplica y dúplica y decretado autos para sentencia, corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al art. 354. III del Código de Procedimiento Civil.

Que, de la compulsas de los datos del proceso, se establece que los objetos de la controversia a ser resueltos son:

1. Si la Autoridad Administrativa Tributaria habría impuesto correctamente una sanción directa por Omisión de Pago de la Declaración Jurada (Formulario 200 IVA), del periodo fiscal mayo de 2009 a la contribuyente Zoila Gladys Gisbert Jarandilla, por lo que no existe etapa de verificación, sino una deuda impaga determinada por la misma contribuyente y si la contribuyente, habría desconocido en su oportunidad, la procedencia de la Declaración Jurada por la que se inicia la ejecución tributaria.
2. Si la Declaración Jurada autodeterminada por el sujeto pasivo y no pagada constituye título de ejecución tributaria.



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 836/2012. Contencioso Administrativo.- Gerencia
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra la
Autoridad General de Impugnación Tributaria.

3. Si la Autoridad General de Impugnación Tributaria, vulnerando el principio de verdad material, no consideró los fundamentos jurídicos en la interposición del Recurso Jerárquico, planteado por la Administración Tributaria, cuando la misma señaló que la contribuyente a fin de hacer valer la solicitud de anulación de la Declaración Jurada Formulario 200 IVA con N° de Orden 8369422, debió proceder mediante una solicitud formal de Rectificación de Declaración Jurada.

Una vez analizado el contenido de los actos y Resoluciones Administrativas; los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos:

1. En relación al primer objeto de controversia referido a: *"Si la Autoridad Administrativa Tributaria, habría impuesto correctamente una sanción directa por Omisión de Pago de la Declaración Jurada (Formulario 200 IVA), del período fiscal mayo de 2009 a la contribuyente Zoila Gladys Gisbert Jarandilla, por lo que no existe etapa de verificación, sino una deuda impaga determinada por la misma contribuyente y si la contribuyente habría desconocido en su oportunidad, la procedencia de la Declaración Jurada por la que se inicia la ejecución tributaria"*, se debe realizar las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
 - a) De la revisión de obrados se tiene que el 29 de agosto de 2011 la Administración Tributaria, procedió a notificar a la contribuyente Zoila Gladys Gisbert Jarandilla con el proveído de inicio de ejecución tributaria N° 24 3102 11 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/PROV/1999/2011) de 16 de agosto, mediante el cual hace saber que *"estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Form. 200 con Nro. de Orden 8369422, correspondiente al período fiscal mayo de 2009, presentada el 2 de junio de 2009 por la suma total líquida y exigible de 67893 UFV..."* *"...que se dio inicio a la ejecución tributaria del mencionado título y que al tercer día de su legal notificación con el presente proveído se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes..."* (fs. 2 de antecedentes administrativos, anexo 2).

El 7 de octubre de 2011, la contribuyente presentó nota con Ref.: *"Adjunta documentación para suspender inicio de ejecución tributaria"*, mediante la cual señala que desconoce completamente a qué personas pertenece las firmas que aparecen en los formularios 200 de Declaración Jurada mensual de los periodos de marzo, mayo y julio de 2009, señalando que dichas firmas no pertenecen a la contribuyente, y que conforme la documentación que adjunta, la contribuyente no pudo haber presentado esas Declaraciones Juradas ya que su empresa se encontraba inactiva desde el mes enero de 2008, por lo que dichas declaraciones son falsas, indicando además que *"Impuestos Nacionales como receptor de las Declaraciones Juradas también debe ser la entidad que identifique quién presentó esas Declaraciones Juradas"* (fs. 23 a 24 de antecedentes administrativos, anexo 2).

El 24 de octubre de 2011 la Administración Tributaria, procede a notificar a la contribuyente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Número 25 1341 11, de 7 de septiembre de 2011, mediante el cual, señalando que *"por evidenciarse falta de pago o el pago de menos, correspondiendo calificar la conducta del contribuyente e imponer la sanción..."*, instruye el inicio del Sumario Contravencional contra la contribuyente (fs. 3 de antecedentes administrativos, anexo 2).

El 11 de noviembre de 2011, la contribuyente presentó nota mediante el cual, de manera relacionada a su nota presentada el 7 de octubre de 2011 (señalada líneas arriba) presentó sus descargos ofreciendo pruebas, mencionando que la empresa registrada a su nombre se encontraba inactiva desde el mes de enero de 2008, por lo que presentó ante el SIN Declaraciones Juradas en cero, señalando que desconoce la procedencia de la persona que a su nombre y sin su autorización habría firmado y presentado ante el SIN el Formulario 200 IVA con Nro. de Orden 8369422, en el que la firma del formulario al ser cotejada con la firma de su cédula de identidad no coinciden, y que sería imposible respaldar el monto declarado de ingresos de dicho formulario, porque su empresa se encontraba inactiva y sin movimiento económico desde enero de 2008, conforme respalda las facturas anuladas, presentando como prueba, 2 talonarios de facturas, copia de formulario N° 8369422, Libro de Ventas, Declaraciones Juradas de los periodos de abril, junio y agosto de 2009, nota de 7 de octubre de 2011, certificación del Banco Unión (nota de fs. 8 a 10, más prueba de fs. 11 a 22 de antecedentes administrativos, anexo 2).

La Administración Tributaria el 18 de enero de 2012, emitió el Informe N° 07 0371 12, mediante el cual señala que respecto a la no correspondencia de la firma, el SIN no sería el ente señalado por Ley a efecto de la verificación de la veracidad o no de la firma, asimismo, luego de enunciar los descargos presentados por la contribuyente manifestó que esta debe presentar ante el Departamento de Fiscalización en el caso de considerar una rectificatoria de la Declaración Jurada observada (fs. 29 a 30 de antecedentes administrativos, anexo 2). Para luego emitir la Resolución Sancionatoria N° 18 0016 12 de 1 de febrero, mediante la cual de manera genérica hace referencia a la normativa referida a la declaración jurada mencionando que no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, citando los descargos presentados por la contribuyente en la etapa probatoria, sin efectuar una valoración concreta de los mismos, limitándose a señalar que la Administración Tributaria no es el ente señalado por Ley a efecto de la verificación de la veracidad o no de la firma, resolviendo sancionar a la contribuyente, con una multa del 100% del tributo omitido, por la Declaración Jurada con Nro. de Orden 8369422 del periodo mayo de 2009, cuyo impuesto no fue pagado en la fecha de vencimiento (fs. 31 a 33 de antecedentes administrativos, anexo 2).

Se tiene también como antecedentes recursivos, que dentro del Recurso de Alzada presentado por la contribuyente en contra de la



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 836/2012. Contencioso Administrativo.- Gerencia
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra la
Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Resolución Sancionatoria N° 18 0016 12 de 1 de febrero, querella de fecha 27 de marzo de 2012 por delitos de falsedad material e intelectual, denunciando la falsedad de las Declaraciones Juradas, y proponiendo diligencias para dar con la verdad de los hechos (fs. 84 a 85 de antecedentes administrativos, anexo 1).

b) Si bien la Administración Tributaria, conforme normativa ha procedido a notificar a la contribuyente con el proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y Auto Inicial de Sumario Contravencional, imponiendo una sanción directa por Omisión de Pago de la Declaración Jurada por el periodo fiscal mayo de 2009, empero ésta no ha tomado en cuenta el reclamo oportuno que realizó la contribuyente; pues conforme se tiene de los antecedentes del proceso, es preciso manifestar que la contribuyente quien tiene derecho a un justo y equitativo proceso en el marco de lo establecido en el art. 115 de la CPE y su derecho a la petición, dentro del sumario contravencional que se le inició, presentó descargos y pruebas que han puesto en evidente duda la Declaración Jurada Form. 200 con Nro. de Orden 8369422, correspondiente al periodo fiscal mayo 2009, al desconocer la procedencia de la misma y manifestar o poner a consideración de la Administración Tributaria el movimiento económico de la empresa a la que representa de la que refirió su inactividad, al respecto es preciso hacer alusión al principio de buena fe previsto en el art. 4 inc. e) de la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley 2341), que ha sido entendida por la SC N° 0095/2001 de 21 de diciembre como el clima de mutua confianza que debe regir la relación entre la Administración Pública y el Administrado, que permita a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen y certeza respecto a las decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades públicas, la citada Sentencia Constitucional con relación a este principio expresamente señala: *"...es la confianza expresada a los actos y decisiones del Estado y el servidor público, así como a las actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades públicas. De manera que aplicado este principio a las relaciones entre las autoridades públicas y los particulares, exige que la actividad pública se realice en un clima de mutua confianza que permita a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen, según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y precedentes emanadas de la propia administración, asimismo, certeza respecto a las decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades públicas..."*. En correlación a ello el art. 69 de la Ley 2492, señala que *"En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias."*

c) Ahora bien en el caso de autos, las notas presentadas por la contribuyente el 7 de octubre de 2011 y 11 de noviembre de 2011, más la prueba aportada, debieron ser interpretadas de acuerdo al

principio de buena fe previsto en los arts. 4 inc. e) de la Ley del Procedimiento Administrativo y 69 de la Ley 2492, porque tanto estas notas como las pruebas aportadas han puesto en duda la veracidad de la Declaración Jurada con Nro. de Orden 8369422 correspondiente al NIT 2373267013, y por ello para dar certidumbre y certeza de las actuaciones, decisiones y emisión de resoluciones en la relación Administración Tributaria y la contribuyente (Zoila Gladys Gisbert Jarandilla), se debió considerar la duda razonable que implicaba o recaía sobre el contenido y registro de los datos contenidos en la referida Declaración Jurada, la cual si bien conforme dispone el art. 78 de la Ley 2492, hace de la presunción, fiel reflejo de la verdad ya que comunica hechos, actos y datos al SIN, ello no debe implicar dejar de considerar que la finalidad de los recursos administrativos es establecer la **verdad material** sobre los hechos, para establecerse en este caso una real base imponible, para tutelar el legítimo derecho del sujeto activo, que es a percibir la deuda, así como del sujeto pasivo, que es a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, conforme dispone el art. 69 del CTB y no limitarse simplemente a señalar que las Declaraciones Juradas *"son una manifestación de hechos, actos y datos del administrado y que el SIN no es el señalado por ley a efecto de la verificación de la veracidad o no de la firma"*, cuando al contrario podía también establecer aspectos que de alguna manera vinculen la citada Declaración Jurada con la contribuyente con la revisión del Libro de Ventas, las facturas habilitadas (dosificadas), el cruce de información o realizar en el acto la imputación de pago en valores, lo que habilitaba a la Administración Tributaria a dar plena aplicabilidad a las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, conforme dispone los arts. 21 y 100 de la Ley 2492 y no coartar el derecho a la defensa de la contribuyente imponiendo una sanción directa por Omisión de Pago de la Declaración Jurada Formulario 200 IVA, por el periodo fiscal mayo 2009, pues cuando el legislador atribuye a la administración facultades sancionadoras, no debe proceder por puro arbitrio, sino que dichas facultades deben cumplir determinadas condiciones para ser constitucionales, observando las garantías básicas de orden material y formal, en este caso el principio de verdad material y de buena fe.

2. En relación al segundo objeto de controversia referido a: *"Si la Declaración Jurada autodeterminada por el sujeto pasivo y no pagada constituye título de ejecución tributaria"* se debe realizar las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

Si bien la Declaración Jurada conforme dispone el art. 78 de la Ley 2492 hace de la presunción, fiel reflejo de la verdad, ya que comunica hechos, actos y datos a la Administración Tributaria, y comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben, se tiene que cuando una Declaración Jurada no ha sido debidamente pagada llega a constituir un Título de Ejecución Tributaria conforme a los arts. 94, 97 parágrafo II y 108 parágrafo I núm. 6) de la Ley 2492, empero, en el presente caso el sujeto pasivo ha llegado a cuestionar oportunamente la procedencia, validez y veracidad de la Declaración



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 836/2012. Contencioso Administrativo.- Gerencia
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra la
Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Jurada del IVA por el periodo mayo de 2009, Formulario 200 con N° de Orden 8369422, por lo que en el presente caso al cuestionarse la Declaración Jurada del periodo mayo 2009, no se constituye en un título de ejecución tributaria, propiamente dicho pues conforme se ha señalado, debería iniciarse un proceso de investigación, para confirmar o no la veracidad de esta y confirmada su veracidad dar inicio a la ejecución tributaria.

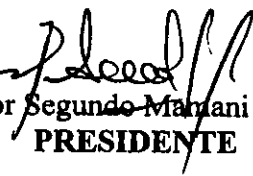
3. En relación al tercer objeto de controversia referido a: *"Si la Autoridad General de Impugnación Tributaria, vulnerando el principio de verdad material, no consideró los fundamentos jurídicos en la interposición del Recurso Jerárquico, planteado por la Administración Tributaria, cuando la misma señaló que la contribuyente a fin de hacer valer la solicitud de anulación de la Declaración Jurada Formulario 200 IVA con N° de Orden 8369422, debió proceder mediante una solicitud formal de Rectificación de Declaración Jurada"* se debe realizar las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Al respecto si bien el demandante refiere que la contribuyente a fin de hacer valer su solicitud de anulación de la Declaración Jurada Form. 200 IVA con Número de Orden 8369422, debió proceder presentando una solicitud formal de rectificación de la Declaración Jurada, debidamente fundamentada e interpuesta ante la Administración Tributaria, al respecto se debe manifestar, que la rectificación de Declaración Jurada se da a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante, conforme dispone el párrafo II del art. 78 de la ley 2492, y arts. 27 y 28 del D.S. 27310 (RCTB), empero en el caso de autos, y conforme se ha expuesto, y con la base de los principios de verdad material y buena fe no tomados en cuenta por la Administración Tributaria, no se habría llegado a presentar la Declaración Jurada por la contribuyente o en su caso la Administración Tributaria conforme el procedimiento no llegó a averiguar la veracidad de la misma, por lo que no correspondería rectificación alguna porque el fondo del asunto era determinar en primera instancia la veracidad de la Declaración Jurada y luego iniciar el proceso de ejecución tributaria.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando **IMPROBADA** la demanda contencioso administrativa de fs. 18 a 23, interpuesta por la GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES representada por Apolinar Tórrez Gutiérrez contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en consecuencia queda firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 841/2012 de 18 de septiembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y por ende la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0561/2012 de 2 de julio.

**Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos
remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.**

Regístrese, notifíquese y archívese.


Pastor Segundo Mamani Vilca
PRESIDENTE


Jorge Isaac von Borries Méndez
DECANO


Rómulo Calle Mamani
MAGISTRADO


Antonio Guido Campero Segovia
MAGISTRADO


Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO


Rita Susana Nava Durán
MAGISTRADA


Norka Natalia Mercado Guzmán
MAGISTRADA


Maritza Suintira Juaniquina
MAGISTRADA


Fidel Marcos Tordoya Rivas
MAGISTRADO


Sandra Magaly Mendivil Bejarano
SECRETARIA DE SALA PLENA


**TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA
SALA PLENA**

GESTIÓN: 2016.....

SENTENCIA N° 191..... FECHA 21 de abril.....

LIBRO TOMA DE RAZÓN N° 17216.....


VOTO DISIDENTE:


Sandra Magaly Mendivil Bejarano
SECRETARIA DE SALA
SALA PLENA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA